

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 7 de septiembre de 2020

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76-111-33-33-001-2016-00274-01
DEMANDANTE:	ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
DEMANDADO:	UGPP
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO QUE DECLARÓ CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resolverá el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 635 del 27 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, que declaró la ilegalidad del auto interlocutorio nro. 98 del 08 de marzo de 2017, por medio del cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP y, en consecuencia, rechazó la demanda ejecutiva instaurada por el señor Elvio Tulio Imbachi Botina, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

2. ANTECEDENTES

En ejercicio del proceso ejecutivo, el señor Elvio Tulio Imbachi Botina solicitó librar mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de \$18.475.163, por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga el 20 de mayo de 2008, ejecutoriada el 4 de junio de 2008.

2.1. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 635 del 27 de junio de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de Buga declaró la ilegalidad del auto interlocutorio nro. 98 del 08 de marzo de 2017, por medio del cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP y, en consecuencia, rechazó la demanda ejecutiva instaurada por el señor Elvio Tulio Imbachi Botina por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Los argumentos expuestos fueron los siguientes:

Que, el 8 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Administrativo de Buga expidió el auto interlocutorio nro. 98 que libró mandamiento ejecutivo en contra de la UGPP, no obstante, por solicitud del apoderado judicial de la parte demandada, el juzgado revisó nuevamente el presente asunto, y encontró que el término legal para presentar el medio de control caducó, conforme el literal k del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

RADICACIÓN : 2016-00274-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
Demandado : UGPP



Dijo que la providencia a ejecutar es la nro. 059 del 20 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, que quedó ejecutoriada el 4 de junio de 2008, y que, como el término para presentar el medio de control ejecutivo empezó a correr al vencimiento de los 18 meses establecidos en el artículo 177 del CCA, es decir, el 04 de diciembre de 2009, el término de caducidad inició al día siguiente, 05 de diciembre de 2009 y culminó el 05 de diciembre de 2014.

Concluyó que la demanda debe ser rechazada por cuanto fue presentada dos años después de vencido el término de los 5 años que establece el literal k del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, pues fue radicada el 16 de diciembre de 2016, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

2.2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por el Juzgado Primero Administrativo de Buga. Dijo lo siguiente:

Que la obligación que emana del fallo quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2007, se hizo exigible el 25 de marzo de 2009 y el término de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación expiró el 25 de marzo de 2014. Sin embargo, que *«no tener como interrumpido dicho termino, con el proceso liquidatorio de CAJANAL, es desconocer el derecho adquirido que tiene mi mandante al pago de los intereses con el presente proceso reclamados»*.

Dijo que el juzgado desconoció que CAJANAL inició un proceso liquidatorio, por lo que, según lo dispone la Ley 550 de 1999 y el Decreto 254 de 2000, los términos de prescripción y caducidad se interrumpieron, por lo que *“«las obligaciones generadas a partir de la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social deberán ser suplidas por la UGPP, entre ellas el pago de los intereses moratorios generados por la tardanza en el cumplimiento de los fallos judiciales, con consideración de que existió un tiempo muerto, suspendido, en el que los administrados, los cuales tenían derecho a que se les cancelara sus intereses moratorios (...) no tenían a quien accionar y, que tan solo hasta que culmino el proceso liquidatorio de Cajanal, y que la jurisdicción administrativa definiera el sujeto pasivo de las acciones ejecutivas, sumado a que tan solo cuando en el año 2014 (cuando efectivamente se cumplió el fallo judicial) se observa que a mi mandante NO le iban a cancelar los intereses, pues antes de la inclusión NO era predicable que no se los fueran a pagar, es predicable, entonces, que si bien los 5 años y 18 meses, se cumplían el 05 de diciembre de 2014, ante el periodo de interrupción de la liquidación de CAJANAL (12/junio/2009 al 11/junio/2013,-4 años-) nos encontramos ante un nuevo plazo, el que a todas luces y atendiendo la presentación de la demanda 16 de diciembre de 2016 se puede decir que la misma fue incoada dentro del término legal, y por tanto no procede a negar librar mandamiento de pago»*”.

CONSIDERACIONES



1. COMPETENCIA

El artículo 243 del CPACA dispone que el auto que pone fin al proceso es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

3. El que ponga fin al proceso.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae en establecer: 1) si en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de los procesos ejecutivos y 2) si el proceso ejecutivo puede interrumpirse en virtud del proceso liquidatorio iniciado en contra de CAJANAL.

3. TESIS DEL DESPACHO

El despacho estima que no operó la caducidad en este caso, porque a la parte actora le era aplicable la suspensión del término desde la iniciación del proceso de liquidación de CAJANAL (12 de junio de 2009) hasta su finalización (11 de junio de 2013).

4. LA CADUCIDAD EN EL PROCESO EJECUTIVO.¹

La caducidad está definida como «*un fenómeno jurídico cuyo término previsto por la ley se convierte en presupuesto procesal y/o instrumento a través del cual se limita el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación judicial de los mismos, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal*».

Cuando se pretende la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el término para solicitar su ejecución es de cinco años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida¹. Para asuntos que se rigieron por el Decreto 01 de 1984, es de 18 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia². Y, para asuntos adelantados con la Ley 1437 de 2011, es de 10 meses siguientes a la ejecutoria de la misma.

¹ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 164, literal k), antes numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Este precepto tuvo su antecedente remoto con el artículo 44 de la ley 446 de 1998, pues fue sólo con esta norma que se instituyó un término especial de caducidad en títulos ejecutivos para la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

² Artículo 177 del C.C.A.



5. DE LA SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD EN RAZÓN A LA LIQUIDACIÓN DE CAJANAL

Respecto a las causales de suspensión del término de caducidad en materia contenciosa administrativa, el ordenamiento jurídico colombiano, en ciertos casos, ha contemplado la suspensión, como en los procesos de restructuración (Ley 550 de 30 de diciembre de 1999³), entre otros.

Mediante el Decreto 2196 de 2009, se dispuso la supresión de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL E.I.CE., creada por la Ley 6ª de 1945 y transformada en Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, mediante la Ley 490 de 1998, vinculada al Ministerio de la Protección Social. El Gobierno Nacional ordenó su liquidación y señaló que debía aplicarse lo dispuesto en el Decreto 254 de 2000 «*por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas de orden nacional*», modificado por la Ley 1105 de 2006 que en su artículo 1º dispuso que «*(...) los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrolla (...)*», contenidas en el Decreto 663 de 1993.

En relación a la liquidación de Cajanal, el Consejo de Estado, en auto del 16 de junio de 2016⁴, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente William Hernández Gómez, precisó:

“1. Es evidente que las obligaciones derivadas de un derecho pensional respecto del sistema administrado por CAJANAL EICE proveniente de una sentencia judicial, no podía ingresar ni hacer parte de su masa liquidatoria, dado que dichas acreencias, por relacionarse con ese tipo de recursos y no de aquellos propios de la entidad objeto de liquidación, fueron objeto de expresa exclusión normativa de la masa de liquidación, como resaltó anteriormente.

2. A partir del 12 de junio de 2013 CAJANAL EICE desapareció de la vida jurídica y fue sustituida por la UGPP, entidad que por mandato legal, en su condición de sucesor de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen pensional de la extinta CAJANAL, debió continuar ejerciendo sus funciones y ser llamada a asumir la defensa de los procesos ejecutivos, así como dar cumplimiento de las sentencias judiciales en materia pensional.

3. El hecho que una persona haya acudido a reclamar el cumplimiento de una sentencia ante el liquidador de la entidad y este haya negado el mismo a través de un acto administrativo no puede implicar que se derive una nueva controversia de carácter ordinario para obligar al cumplimiento de una providencia judicial contra la extinta CAJANAL respecto de un régimen pensional que no fue objeto de liquidación sino de cambio o sustitución de administrador.

(...)

³ Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, expediente radicado nro. 25-000-23-42-000-2013-06593-01 interno 2823-2014, Demandado: UGPP, Actor: Hernando Torres Carreño.

RADICACIÓN : 2016-00274-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
Demandado : UGPP



No obstante lo anterior, tratándose específicamente de la demanda ejecutiva ejercida contra las entidades en proceso de liquidación, el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento señaló:

“(…) Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social de pensiones.

Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró “... en lo no previsto en el presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre su liquidación, en cuanto sean compatible con la naturaleza de la entidad...”.

Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que “...Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario”.

*En tales condiciones, **por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo** que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013. (...)”*

*Por lo cual, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron **suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013**, esto es, por espacio de cuatro (4) años.*

Levantada la suspensión de los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal el 12 de junio de 2013 con la conclusión del trámite liquidatorio, se reanudó el cómputo de los cinco (5) años con que contaba el actor para formular la demanda ejecutiva respecto de las obligaciones reconocidas en la sentencia condenatoria ...” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Posteriormente, el Consejo de Estado (Sección Segunda Subsección A) ratificó su postura en auto del 30 de junio de 2016, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14), actor: Luis Francisco Estévez Gómez, demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP. En concreto, dijo:

(...) “1.- Las obligaciones que se derivan de una sentencia judicial que reconoce un derecho pensional del sistema administrado por la liquidada CAJANAL EICE, no hacen parte de su masa liquidatoria, dado que por relacionarse con recursos de la seguridad social y no con aquellos propios de la entidad objeto de liquidación, fueron objeto de expresa exclusión frente a la misma.

2.- De hecho, las funciones de reconocimiento de derechos y cumplimiento de sentencias estuvieron inicialmente a cargo del liquidador a través de la UGM y

RADICACIÓN : 2016-00274-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
Demandado : UGPP



aquellas presentadas a partir de noviembre 8 de 2011 se ejercieron por la UGPP.

3.- A partir del 12 de junio de 2013 Cajanal EICE desapareció de la vida jurídica y fue sustituida totalmente por la UGPP, entidad que por mandato legal en su condición de sucesor de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen pensional de la extinta CAJANAL, debió continuar con el ejercicio de sus funciones y ser llamada a asumir la defensa de los procesos, así como dar cumplimiento a las sentencias judiciales en materia pensional.

4.- Ahora bien, el que una persona haya reclamado el pago de una sentencia ante el liquidador de CAJANAL y este haya negado el mismo a través de acto administrativo que resolvió sobre acreencias de la liquidación, no puede originar una nueva controversia de carácter ordinario frente a este acto para que se emita orden de acatamiento de una providencia judicial; ello, en la medida en que el régimen pensional a que se refiere la condena no fue objeto de liquidación sino de cambio o sustitución de administrador y por lo tanto es independiente de ese proceso y de las decisiones que en él sean adoptadas”.(...)

(...)

(...) “En consecuencia, resulta adecuado jurídicamente extender la norma suspensiva de caducidad a los créditos analizados, pero solo durante los lapsos en los cuales las personas se vieron imposibilitadas para acudir a la jurisdicción por la misma actuación errática de esta cuando decidió terminar y remitir los procesos ejecutivos a la liquidación, así como de la misma entidad en liquidación al recibir estos asuntos, negar su inclusión en la masa de liquidación y retardar o negar el cumplimiento a través de la UGM.

Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro (4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra CAJANAL o la UGPP.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que:

Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad hasta el 8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir ante CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto.

A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente en la UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP.

Por ello, tampoco resultaría proporcional para el Estado deudor el extender los efectos de suspensión de la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los casos anteriores.

De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará:

RADICACIÓN : 2016-00274-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
Demandado : UGPP



El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o,

Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP". (...)

Así las cosas, si bien el Consejo de Estado en providencias referidas señaló que los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron durante el tiempo que transcurrió su liquidación, esto solo benefició a los que reclamaron el pago de la sentencia antes del 08 de noviembre de 2011, por lo tanto, para que la suspensión del término operara, el interesado debía: i) presentar petición para hacerse parte del proceso liquidatorio, ii) presentar demanda ejecutiva durante el proceso de liquidación y iii) obtener cumplimiento parcial de la sentencia antes del 08 de noviembre de 2011.

6. CASO CONCRETO

El Señor Elvio Tulio Imbachi Botina presentó demanda Ejecutiva en contra de la UGPP, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de \$ 18.475.163, por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga el 20 de mayo de 2008, que quedó ejecutoriada el 4 de junio de 2008.

El numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 dispone: *“La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial”.*

Por su parte, el artículo 164 del CPACA, consagra la oportunidad para presentar la demanda, y en el literal k) del numeral 2º, señala:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida;”.

Se tiene entonces que el término de caducidad contemplado en la Ley 1437 de 2011 es de cinco (5) años, teniendo en cuenta que el cómputo del término parte desde el momento en que se hace exigible el derecho reconocido en la providencia a ejecutar. Entonces, como la sentencia nro. 059 del 20 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado



Primero Administrativo de Buga, quedó ejecutoriada el 04 de junio de 2008⁵, se aplica el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, que dispone:

“ARTICULO 177 Inciso 4: Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. **Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.**

De lo anterior se entiende que el legislador estableció una condición para hacer exigible una decisión judicial proferida por esta Jurisdicción, en el sentido de que tales condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria 18 meses después de su ejecutoria.

Siendo así, y en vista de que la sentencia que se pretende ejecutar quedó ejecutoriada el 04 de junio de 2008, el plazo de los 18 meses señalado en el artículo 177 del CCA venció el 04 de diciembre de 2009, por lo que el demandante tenía hasta el 05 de diciembre de 2014 para presentar la demanda ejecutiva en término.

Sin embargo, como ya se explicó, el término de caducidad se suspendió desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013 y esta suspensión era aplicable a quienes presentaron petición de pago a CAJANAL antes del 08 de noviembre de 2011.

En este orden de ideas, a folios 25 a 29 del expediente, reposa la Resolución nro. PAP 032895 del 17 de enero de 2011 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, por la cual se da cumplimiento a un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Buga, en el que consta que el apoderado del demandante mediante escritos del 14 de julio y 28 de agosto de 2008 solicitó el cumplimiento del fallo que quedó ejecutoriado el 04 de junio de 2008 (mucho antes de que se cumplieran los 18 meses para solicitar la ejecución del fallo 04 de diciembre de 2009). Es decir, cuando se solicitó el cumplimiento, la entidad demandada no se encontraba en liquidación, sin embargo, ésta dio cumplimiento a la sentencia el 17 de enero de 2011, antes del término estipulado (08 de noviembre de 2011) para que lo cobijara la suspensión del término de caducidad.

Lo anterior permite concluir que no opero el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva, pues la demanda se presentó dentro del término de los cinco (5) años previsto en el CPACA, tal como se resume en el siguiente cuadro:

Petición de cumplimiento	18 meses Ejecución Sentencia	Cumplimiento sentencia	Suspensión y Reanudación del término	Vencimiento del término	Fecha de presentación de la demanda
14-07-2008 28-08-2008	04-12-2009	17-01-2011	12-06-2009 12-06-2013	12-06-2018	16-12-2016

⁵ Fl. 24 anverso del expediente.

RADICACIÓN : 2016-00274-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
Demandado : UGPP



Así las cosas, la demanda fue presentada en tiempo y, en consecuencia, se revocará el auto nro. 635 del 27 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, y se ordenará dejar en firme el auto interlocutorio nro. 98 del 08 de marzo de 2017, por medio del cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP.

Por lo expuesto, se;

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto nro. 635 del 27 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, mediante el cual declaró la ilegalidad del auto interlocutorio nro. 98 del 08 de marzo de 2017, por medio del cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP.

SEGUNDO: ORDENAR dejar en firme el auto interlocutorio nro. 98 del 08 de marzo de 2017, mediante el cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP.

TERCERO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada

RADICACIÓN : 2016-00274-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ELVIO TULIO IMBACHI BOTINA
Demandado : UGPP



Nathaligg